Modificaciones introducidas a la Ley 19.550

Aldo Emilio Urbaneja

1. INTRODUCCIÓN

La unificación de los códigos civil y comercial y las reformas introducidas a la ley de sociedades N° 19.550 (t.o. 1984)¹, ahora denominada “Ley general de sociedades N° 19.550, (t.o. 1984)”, hicieron desaparecer la distinción entre sociedades civiles y comerciales, a la vez que las primeras carecen de regulación y ni siquiera se menciona dónde quedan ahora incluidas las constituidas durante la vigencia del código velezano. Asimismo se incorpora la sociedad unipersonal, tema largamente debatido por la doctrina y mayoritariamente demandada su inclusión, aunque con diversas opiniones respecto a cómo debía legislarse sobre el particular. Debemos adelantar que la forma en que lo hizo la ley N° 26.994² es para beneficiar a las grandes empresas nacionales y a las multinacionales, pero muy poco favorecerá a empresarios individuales. Además de la posibilidad de la constitución de la sociedad anónima unipersonal, también puede ocurrir que otras sociedades, que oportunamente se analizarán, devengan en unipersonales por quedar reducido el número de socios a uno solo.

La reforma efectuada a la ley societaria por la ley N° 26.994, incorpora por vez primera a la legislación argentina la sociedad unipersonal para capitales privados, ya que para las sociedades del Estado ya se encuentran reguladas desde el año 1974 por la ley N° 20.705³.

1 Decreto N° 841/84 del 20 de marzo de 1984 (Boletín Oficial del 30/03/84).

2 Boletín Oficial del 08/10/14, vigente desde el 01/08/15 según ley N° 27.077 (Boletín Oficial del 19/12/14).

3 Sancionada el 31/7/74, promulgada el 13/08/74 (Boletín Oficial del 26/08/74).

2. SOCIEDAD DE UN SOLO SOCIO

La sociedad unipersonal sólo podrá constituirse como sociedad anónima, pero no puede constituirse por una sociedad unipersonal.

La denominación social debe incluir "Sociedad anónima unipersonal", su abreviatura o la sigla "S.A.U."

El capital deberá estar totalmente integrado al momento de ordenarse la inscripción.

Asimismo se las incluye dentro de las sociedades con fiscalización estatal permanente al incorporar al art. 299 un nuevo inciso, el 7, que incluye a estas sociedades anónimas unipersonales dentro de las que tendrán fiscalización estatal, no sólo en el momento de la constitución, sino también durante su funcionamiento, disolución y liquidación.

Esto implica que las SAU: a) deben tener como mínimo 3 directores; b) deben tener sindicatura colegiada en número impar, es decir 3 titulares y 3 suplentes; y c) no pueden prescindir de sindicatura.

3. UTILIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Una de las modificaciones del art. 164 está referida a la sociedad anónima unipersonal, disponiendo que la denominación debe integrarse con la expresión "sociedad anónima unipersonal", su abreviatura, que sería "Soc. Anón. Unipers." o la sigla "S.A.U.". Respecto de las sociedades anónimas pluripersonales continúa la misma disposición, es decir que la denominación debe integrarse con "sociedad anónima", "Soc. Anón.", o "S.A."

La posibilidad de optar entre poner la expresión completa del tipo societario, la abreviatura o la sigla, *se agota en el momento de la constitución*, por lo que tal como se exprese en el estatuto es como queda integrada la denominación societaria, y en consecuencia así deberá ser utilizada por la sociedad durante toda su existencia, hasta la cancelación de su matrícula. Por lo tanto lo más aconsejable es que se utilice la sigla, que es lo más práctico.

Además se elimina el último párrafo que contenía el art. 164 en su redacción originaria, por lo que la omisión del tipo societario ya no hará responsables ilimitada y solidariamente a los representantes de la sociedad, conjuntamente con ella, por los actos que celebren en esas condiciones, lo que resulta una reforma disvaliosa porque puede ocurrir que los terceros no tengan conocimiento del tipo societario con el que están contratando.

4. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL EN SOCIEDADES ANÓNIMAS UNIPERSONALES

Se modifica solamente el inc. 3 del art. 186, y en concordancia con lo dispuesto en el art. 1º, en el art. 11, inc. 4, y en el art. 187, se dispone que en las sociedades anónimas unipersonales, también en las suscripciones de aumento de capital éste debe integrarse totalmente, lo que se deberá acreditar al tiempo de ordenarse la inscripción.

Se mantiene el capital mínimo para todas las sociedades anónimas, fijado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1331/12⁴, en \$ 100.000.

5. INTEGRACIÓN DEL APORTE EN EFECTIVO

La reforma al art. 187 sigue manteniendo el mínimo del 25 % del capital suscrito como obligatorio de integración al momento de ordenarse la inscripción. Pero para las sociedades anónimas unipersonales, en concordancia con lo dispuesto en el art. 1º, en el art. 11, inc. 4, y en el art. 186 para los aumentos de capital, se establece que la integración debe ser de la totalidad del capital suscrito.

La norma continúa disponiendo que la integración mencionada deberá justificarse con el comprobante del depósito en un banco oficial, y que se podrá retirar luego de inscripta la sociedad.

Al mantenerse la obligación del depósito en un banco oficial, reiteramos lo que ya sostuvimos⁵ respecto a que las alternativas para justificar la integración previstas en la resolución N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia⁶ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son inconstitucionales.

4 Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1331/12 del 01/08/2012, Boletín Oficial del 07/08/2012, con vigencia desde el 07/08/2012.

5 Ver URBANEJA, Aldo Emilio. *Constitución de Sociedades Comerciales*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2010, pág. 27, § 29. Integración, 2); y pág. 122, § 156. Integración.

6 Resolución N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia (Boletín Oficial del 31/07/15), art. 69, que luego de referirse al depósito en el Banco de la Nación Argentina, agrega: "Opcionalmente a la constancia de dicho depósito, la acreditación de la integración se tendrá también por satisfecha mediante: 1. La manifestación expresa, en la escritura pública de constitución de la sociedad, del escribano público autorizante de que, por ante él, los socios constituyentes obligados a la integración de los aportes, en cumplimiento de dicha obligación hacen entrega de los fondos correspondientes en debido cumplimiento de las leyes vigentes en materia de evasión fiscal, a los administradores nombrados en ese mismo acto y que éstos los reciben de conformidad y a los fines indicados. Podrá igualmente constar que dicha entrega se hace al mismo escribano público autorizante, con cargo a él de entregar los fondos a la administración social una vez inscripta la constitución de la sociedad. 2. Acta notarial por separado en la cual consten los mismos recaudos consignados en el inciso anterior, cuando la sociedad se constituya por instrumento privado en los casos autorizados por la ley".

Respecto de los aportes no dinerarios se mantiene la obligación de integrarlos totalmente, y que sólo pueden consistir en obligaciones de dar y su cumplimiento debe justificarse al tiempo de solicitar la conformidad del art. 167.

6. CAUSAS DE DISOLUCIÓN

Dos reformas se introducen al art. 94. Una de ellas es la eliminación del inc. 8, pues al haberse incorporado la sociedad unipersonal ha dejado de ser causal de disolución la reducción a uno de los socios. No obstante ello, se incorpora el art. 94 bis, que determina la transformación de pleno derecho de algunos tipos societarios en sociedades anónimas unipersonales.

La otra reforma es la relacionada con el inc. 6, que tiene como causal de disolución la declaración en quiebra, aclarando que la disolución quedará sin efecto si se celebrare avenimiento o se dispone la conversión, con lo cual se adapta a lo dispuesto por la Ley de concursos y quiebras, N° 24.522⁷, en el art. 90, que faculta al deudor que se encuentre en las condiciones del art. 5° a solicitar la conversión del trámite en concurso preventivo, dentro de los 10 días contados a partir de la última publicación de los edictos a que se hace referencia en el art. 89. Esto está justificado puesto que desapareció el instituto del concordato resolutorio previsto en la ley N° 19.551⁸.

7. REDUCCIÓN A UNO DEL NÚMERO DE SOCIOS

El artículo 94 bis dispone que la reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, en concordancia con haber eliminado del art. 94 el inciso 8 de su anterior redacción. Asimismo dispone la *transformación de pleno derecho* de las *sociedades en comandita*, tanto simple como por acciones, y de las *sociedades de capital e industria, en sociedades anónimas unipersonales*, siempre que en el plazo de tres meses no se decidiera otra solución. Tales soluciones no serían otras que la disolución, la fusión con otra sociedad, o el restablecimiento de la pluralidad de socios, y eventualmente a partir de esa pluralidad la transformación en otro tipo societario.

Pero es necesario tener en cuenta que, por más que se disponga la transformación de pleno derecho de ambas comanditas y de la sociedad de capital de industria, hay que adecuar el estatuto al nuevo tipo societario impuesto,

7 Boletín Oficial del 09/08/95.

8 Boletín Oficial del 08/05/72.

designando 3 directores, 3 síndicos titulares y 3 suplentes, para lo cual la ley no establece plazo, ni cuáles serán las consecuencias de su incumplimiento.

Además se advierte que *nada se legisla respecto de las sociedades colectivas y de las de responsabilidad limitada* que queden *con un solo socio*, pues al haberse quitado del art. 94 la causal de disolución por reducción a uno del número de socios, la sociedad no tiene causal de disolución, ni debe transformarse, y tampoco se la obliga a que en un plazo determinado recomponga la pluralidad de socios, por lo que resulta que continuarán operando como tal con un único socio, pero entendemos que en tal caso la sociedad deberá considerarse comprendida en la sección IV del capítulo I. Es evidente que esta situación requiere una modificación de la ley.

Es discutible la aplicación el inc. g) del art. 163 CCyC, que al establecer las causales de disolución de todas las personas jurídicas, dice: "...la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses", ya que existe regulación especial en la ley general de sociedades.

En el ámbito porteño la Inspección General de Justicia estableció en los arts. 202 a 205 de la resolución general N° 7/2015, los requisitos a cumplir para registrar la transformación de la sociedad por reducción a uno de los socios, que no difieren sustancialmente de los requeridos para cualquier transformación.

En la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, nada especial ha regulado en la disposición general N° 45/2015, por lo que entendemos que deberán cumplirse los requisitos establecidos para la transformación.

8. EXCLUSIÓN DE UN SOCIO EN SOCIEDADES DE DOS

La modificación introducida al art. 93, que mantiene la obligación del socio inocente de asumir el activo y pasivo sociales, es consecuencia de la permisibilidad de la sociedad unipersonal, lo que motivó que se eliminara del art. 94 el inc. 8 como causal de disolución, ello sin perjuicio de la aplicación del art. 94 bis.

9. NULIDADES QUE AFECTEN EL VÍNCULO DE LOS SOCIOS

Las modificaciones introducidas al art. 16 se relacionan especialmente con la incorporación de las sociedades unipersonales en la ley general de sociedades.

Doctrina

Se establece que la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producen la nulidad, anulación o resolución del contrato, excepto que la participación o prestación de ese socio deba considerarse esencial, agregando la disposición legal o que se trate de socio único.

Por este caso del socio único, no es feliz la redacción del artículo, ya que en los supuestos de la sociedad unipersonal no existe contrato, sino acto jurídico que da nacimiento a la sociedad.

También se dispone que en el caso de sociedades en comandita, simple o por acciones, como en las sociedades de capital e industria, el vicio de voluntad del socio único de una de las categorías, hace anulable el contrato.

10. ATIPICIDAD. OMISIÓN DE REQUISITOS ESENCIALES

Del art. 11 de esta ley, como del art. 17, surge que se mantiene el principio de tipicidad, aunque su violación ahora no causa su nulidad sino que pasa a integrar las sociedades de la sección IV del capítulo I, llamadas "Sociedades no constituidas según los tipos legales y otros supuestos", sobre las que se legisla en los arts. 21 a 26. Tampoco puede incorporar elementos incompatibles con el tipo legal, como podría ser, por ejemplo, organizar la administración y representación en forma incompatible con el tipo social elegido, como sería un directorio para una sociedad en comandita simple, ya que en tal caso también pasaría a integrar las sociedades de la sección IV ya citada.

Ya nada se dice en la ley respecto de la omisión de requisitos esenciales no tipificantes, que son aquellos comunes a todo tipo societario, por lo que su omisión no ocasionará su nulidad.

11. SOCIEDADES NO CONSTITUIDAS SEGÚN LOS TIPOS DEL CAPÍTULO 2 Y OTROS SUPUESTOS

Se modificó el régimen de la sociedad irregular, que pasó a llamarse "sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo II, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley".

12. SOCIEDADES QUE OMITAN REQUISITOS ESENCIALES O QUE INCUMPLAN FORMALIDADES

Con la nueva redacción dada por la ley N° 26.994 a la sección IV del capítulo I, de la ley N° 19.550, ya no podemos seguir hablando de sociedades irregulares

o de hecho, pues no existen en la nueva denominación. Mas ello no significa que no tengan acogida dentro de la legislación actual, no obstante algunos cuestionamientos realizados por parte de la doctrina⁹, y que compartiendo la opinión de MANÓVIL¹⁰, entendemos que tanto las sociedades irregulares, como las de hecho, se encuentran comprendidas en esta sección IV.

Tienen cabida dentro de esta regulación las sociedades ya constituidas con anterioridad a la vigencia de la reforma, tanto irregulares, de hecho –sin importar ahora si el objeto es comercial o no-, como aquellas que aun adoptando uno de los tipos previstos en el capítulo II no se hayan inscripto, puesto que esto implica que no han cumplido con todas las formalidades impuestas. Y debemos tener presente que según la Real Academia Española, la segunda acepción de *formalidad* significa “cada uno de los requisitos para ejecutar algo”, es decir que la inscripción en el Registro Público es uno de los requisitos a cumplir, por lo que no debe ceñirse la interpretación de la ley sólo al acto constitutivo. Como consecuencia de ello tampoco podemos decir que una sociedad anónima unipersonal que no se inscriba permitirá al único socio limitar su responsabilidad, puesto que en tal situación deberá responder con todo su patrimonio ya que aunque sostengamos que la sociedad existe desde el instante de su constitución, en este supuesto por medio del acto jurídico que le da nacimiento, no alcanzará la limitación de responsabilidad por cuanto conforme lo dispuesto por el art. 7º la sociedad sólo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro Público, ya que *la inscripción tiene efectos integrativos ad regularitatem*.

13. Oponibilidad del Contrato Social

Cambiando el sistema de la ley Nº 19.550, la reforma establece, en el art. 22, que ahora el contrato social es oponible tanto entre los socios como respecto de los terceros que tuvieren conocimiento del mismo al tiempo de comenzar la contratación o la relación obligatoria. También los terceros pueden invocarlo contra la sociedad, los socios y los administradores.

Por supuesto que la oponibilidad del contrato es factible en la medida en que las cláusulas que pretendan oponer no sean contrarias a disposiciones imperativas de la ley de sociedades, como por ejemplo las contenidas en el art. 13, que dice que son nulas las siguientes estipulaciones: 1. Que alguno o algunos de los socios

9 VÍTOLO, Daniel R. en *Comentarios a las modificaciones de la ley 26.994 a la Ley General de Sociedades, Análisis comparativo con la ley 19.550*, Ad Hoc, Buenos Aires, 2015, especialmente capítulos IV y VII.

10 MANÓVIL, Rafael M. “Las Sociedades de la sección IV del Proyecto de Código”, La Ley 24/10/2012, La Ley 2012-F,758, cita online: AR/DOC/4907/2012.

reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos, o que sean liberados de contribuir a las pérdidas; 2. Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias; 3. Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales; 4. Que la totalidad de las ganancias y aun de las prestaciones a la sociedad, pertenezcan al socio o a los socios sobrevivientes; 5. Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva.

Tampoco son admisibles cláusulas que no permitan a los socios impugnar los estados contables, pues el art. 69 dispone que el derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, es irrenunciable, y cualquier convención en contrario es nula, como así también las cláusulas que liberaran a los administradores y síndicos de sus responsabilidades, tal como lo regula el art. 72.

14. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Conforme con el nuevo art. 23, se establece que las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios. Respecto de las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que esos terceros la conocieron al tiempo del nacimiento de la relación jurídica.

15. ADQUISICIÓN DE BIENES REGISTRABLES

Con relación a la posibilidad que estas sociedades puedan adquirir bienes registrables, la redacción del art. 23 termina con la discusión existente hasta ahora, ya que alguna parte de la doctrina interpretaba -erróneamente para nuestro criterio- que de la anterior redacción del art. 26 que establecía que las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, inclusive en caso de quiebra, se juzgarían como si se tratara de una sociedad regular, excepto respecto de los bienes cuyo dominio requiere registración, podía extraerse que la sociedades irregulares y de hecho no podían ser titulares de bienes registrables no era lógico. Sobre el particular el notariado en infinidad de congresos y jornadas

sostuvo que sí podían adquirir bienes registrables¹¹. Además el Registro Nacional de la Propiedad Automotor registraba dichos bienes a nombre de sociedades irregulares y de hecho.

Con la nueva regulación, cuando una sociedad comprendida en esta sección adquiera bienes registrables, lo que es perfectamente admitido, en la escritura de adquisición *hay que hacer comparecer a todos los socios* y que éstos manifiesten que ellos son los únicos, qué participación tiene cada uno, y quién o quiénes son los representantes y las facultades que tienen. Con ello el bien se inscribirá a nombre de la sociedad. Luego, la sociedad podrá disponer o gravar esos bienes, como por ejemplo constituir derechos reales de usufructo, uso y habitación, hipotecas, como así también enajenarlos por cualquiera de los contratos admitidos a ese fin, es decir, entre otros, compraventa, permuta o dación en pago.

16. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD

También el art. 23, en su párrafo último, establece que la existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba, al igual que lo establecía el art. 25 en su anterior redacción.

17. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

Con la reforma introducida al art. 24, ahora los socios de las sociedades no constituidas según los tipos previstos en el capítulo II, responden en forma mancomunada y por partes iguales. Esta responsabilidad *puede modificarse pactando en el contrato social distinta proporción, o la solidaridad entre ellos o con la sociedad*. También puede modificarse la responsabilidad por así haberse estipulado en una o más relaciones jurídicas, y que, por supuesto, será aplicable solamente a esas relaciones. Igualmente dicha modificación puede surgir por las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual no se cumplieron requisitos sustanciales o formales, pero en este caso también surgirá del contrato social.

11 Puede verse, entre otras, las conclusiones del Tema V de la XXXII Jornada Notarial Bonaerense, desarrollada en Bahía Blanca, en 1999, Revista Notarial N° 934 (Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires), págs. 898 a 900.

18. SUBSANACIÓN

Cuando: a) se han omitido requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes; b) existen elementos incompatibles con el tipo elegido; o c) no se han cumplido requisitos formales, pueden subsanarse en cualquier tiempo dentro del plazo previsto para la duración de la sociedad, ya sea a pedido de cualquier socio o de la sociedad, y para concretar tal subsanación es necesario el acuerdo unánime de todos los socios. Si no se lograre tal acuerdo, puede requerirse la subsanación judicialmente, la que se tramitará por procedimiento sumarísimo. Si tampoco se lograre acuerdo el juez puede suplirlo, siempre que no imponga mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan.

En caso de que algún socio estuviera disconforme con la resolución judicial, podrá ejercer el derecho de receso dentro de los 10 días de quedar firme la decisión judicial, en los términos del art. 92; es decir que el socio que se retira tiene derecho a que se le entregue el valor de su parte a la fecha de la invocación de su exclusión. Si existen operaciones pendientes, participa en los beneficios o soporta las pérdidas, y la sociedad puede retener la parte del socio excluido hasta concluir las operaciones en curso; asimismo si hubiese efectuado algún aporte de uso o goce la sociedad podrá retenerlo en caso de ser indispensable para el funcionamiento de la sociedad, debiendo pagarle lo que corresponda.

El socio que se retira responderá hacia los terceros por las obligaciones sociales hasta la inscripción del contrato en el Registro Público, aunque esto último no parece ser justo si es que tal opción de ejercer el derecho de receso como consecuencia de la resolución judicial se notifica en el expediente en que tramitó la subsanación.

Lo que no surge de las disposiciones de esta sección IV, es la posibilidad del socio que pretende retirarse de requerir la disolución y liquidación de la sociedad, lo que sí ocurría en el anterior régimen establecido por el art. 22, en que cualquier socio podía pedirla, y se producía después de cumplidos determinados requisitos, siempre que la mayoría no decidiera la regularización.

19. RELACIONES ENTRE ACREEDORES DE LA SOCIEDAD Y DE LOS SOCIOS

Con la nueva redacción del art. 26 se equiparan con las sociedades tipificadas en el capítulo II las relaciones entre los acreedores de la sociedad y los acreedores particulares de los socios, con relación a todos los bienes, es decir que se deja de lado aquella distinción efectuada por el texto originario de la ley N° 19.550, que excluía esta igualdad con las otras sociedades respecto de los bienes registrables.

20. SOCIEDAD ENTRE CÓNYUGES

Ahora con la modificación introducida por la ley N° 26.994, los cónyuges pueden integrar entre sí cualquiera de los tipos societarios previstos en la LGS, incluso aquellas sociedades comprendidas en la sección IV. Han desaparecido las restricciones que antes limitaban dicha posibilidad a las sociedades por acciones, es decir anónimas o en comandita por acciones -si eran socios comanditarios- o de responsabilidad limitada, y si por cualquier motivo devinieran socios en algún otro tipo de sociedades, ésta debía transformarse en el plazo de 6 meses o de lo contrario uno de los esposos debía ceder su participación a otro socio o a un tercero.

Empero no obstante lo dispuesto por el art. 27, debemos tener presente que en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el libro tercero, título 2, contratos en general, capítulo 4, "Incapacidad e inhabilidad para contratar", en el art. 1002 al referirse a las inhabilidades especiales se establece que no pueden contratar en interés propio: "...d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí". Debemos tener presente que este inc. d) no estaba en el anteproyecto, y que fue incorporado con posterioridad, muy probablemente sin advertir lo que se establecía en el art. 27 de la ley societaria, por lo que hubiese sido deseable que si no se quería afectar la constitución o participación posterior en sociedades, así se lo dejara aclarado. Por lo tanto estas dos disposiciones traen, en principio, una aparente contradicción. Es decir, ¿todos los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades, o solamente aquellos que hayan optado por otro régimen patrimonial matrimonial que no sea de comunidad? Es cierto que la disposición del artículo societario es especial, pero no es menos especial la contenida en el código, que expresamente determina que no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad. Por lo expuesto pensamos que los cónyuges que optaren por el régimen patrimonial matrimonial de separación no tienen ninguna restricción para constituir o integrar sociedades de cualquier tipo, o de las incluidas en la sección IV del capítulo I de la LGS. Los cónyuges que estuvieren regidos por el régimen de comunidad no podrán contratar entre sí, tal como lo dispone el inc. d) del art. 1002 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero tal disposición no es aplicable a las sociedades regidas por la ley N° 19.550, por cuanto lo dispuesto por el art. 27 es una excepción al régimen general dispuesto por el código. De no ser así, la ley societaria debió haber previsto las consecuencias de la infracción a tal restricción, lo que no hizo, y además se debió contemplar la situación en el supuesto que uno de los cónyuges pudiera adquirir por cualquier título la calidad de socio del otro, por ejemplo por herencia, lo que tampoco surge de las disposiciones de la LGS, y esto se da porque precisamente el legislador dispuso que los cónyuges, independientemente del régimen patrimonial matrimonial que

Doctrina

tengan, pueden integrar entre sí cualquiera de los tipos societarios, e incluso integrar las sociedades incluidas en la sección IV del capítulo I.

21. SOCIOS HEREDEROS MENORES, INCAPACES O CON CAPACIDAD RESTRINGIDA

En la nueva redacción del art. 28, además de los menores de edad, se incluyó a los incapaces y a los que tienen capacidad restringida, para el supuesto que se constituyere sociedad con bienes sometidos a indivisión forzosa hereditaria. Al igual que antes, el contrato social debe ser aprobado por el juez de la sucesión, y en el supuesto que exista posibilidad de colisión de intereses entre el representante legal, el curador o el apoyo, se debe designar un representante *ad hoc*, tanto para la celebración del contrato, como para el contralor de la administración en caso de que la misma fuere ejercida por alguno de esos representantes. Se eliminó la referencia a la ley N° 14.394 porque la misma fue derogada.

22. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

La reforma que se introdujo al art. 29 consiste en la eliminación de la referencia al art. 27, por cuanto con la modificación efectuada al mismo ya no se dan las circunstancias que lo justificaban.

Actualmente, además de la referencia a los menores de edad, se agregó a los incapaces y a las personas con capacidad restringida, estableciéndose que en caso de infracción a lo dispuesto por el art. 28 y sin perjuicio de la transformación de la sociedad para que tales personas tengan responsabilidad limitada, el representante, el curador y el apoyo, según el caso, y los consocios capaces, serán solidaria e ilimitadamente responsables por los perjuicios ocasionados.

23. CAPACIDAD DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES DE SER SOCIAS DE OTRAS SOCIEDADES

Con la modificación introducida al art. 30, la ley N° 26.994 amplió la posibilidad de las sociedades por acciones -anónimas y en comandita por acciones- para participar no sólo en sociedades por acciones sino también en sociedades de responsabilidad limitada.

Además se incluyó un párrafo que establece que podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Este agregado era totalmente innecesario, puesto que

al no tratarse de sociedades, sino simplemente de contratos, no había ninguna restricción para ello. En los fundamentos que da la comisión redactora del anteproyecto se dice que: "...ha considerado conveniente, en consonancia con la doctrina, ampliar las posibilidades existentes en cuanto a la sociedad socia y las participaciones recíprocas. El art. 30 de la ley N° 19.550 es reemplazado por una norma muy amplia para facilitar y promover negocios de organización, permitiendo recibir capitales. Se aplica especialmente a los denominados *Joint Ventures*, contrato exploratorio o preliminar, que no configura desde ningún punto de vista una sociedad, menos de hecho como alguna jurisprudencia ha señalado. Todas estas situaciones son contratos, y como tales deben ser tratados".

Debemos aclarar que el artículo proyectado era mucho más permisivo que el que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, y que resultó aprobado.

24. REQUISITOS PARA SER SÍNDICO

Para ser síndico se mantiene la exigencia, en el art. 285, de tener el título habilitante de abogado o de contador público, pero se ha modificado la posibilidad de que sea una sociedad civil constituida exclusivamente por estos profesionales, como consecuencia de haberse eliminado a estas sociedades del derecho positivo argentino. Por lo tanto de ahora en más los profesionales indicados podrán integrar, para ejercer la sindicatura, aquellas sociedades en que la responsabilidad de todos los socios sea solidaria, es decir que tiene que ser una sociedad colectiva.

Continúa la exigencia de que tengan domicilio real en el país.

25. SOCIEDADES CIVILES. SITUACIÓN ACTUAL

Las sociedades civiles que estuvieran legisladas en los arts. 1648 a 1788 bis del código velezano, desaparecieron de la legislación actual. No obstante ello aquellas sociedades civiles que se hubieren constituido correctamente durante la vigencia de la anterior legislación, es decir por escritura pública y que de haberse efectuado reformas al acto constitutivo también se lo haya hecho por escritura pública, pueden continuar operando como tales. Por supuesto que en caso de tener que efectuarse alguna modificación, es necesario adaptarse a la nueva legislación, para lo cual podrán transformarse en alguno de los tipos societarios previstos en el capítulo II de la ley general de sociedades N° 19.550, no obstante que la resolución general de la Inspección General de Justicia N° 7/2015, para el ámbito porteño, dispone en el art. 185 que es admisible tanto la subsanación como la transformación. No compartimos la posibilidad de la subsanación ya que tales sociedades nada tie-

Doctrina

nen que subsanar puesto que al momento de su constitución lo hicieron conforme a la legislación entonces vigente, por lo que lo que corresponde es aplicar el instituto de la transformación como consecuencia de la modificación de la legislación pertinente. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, en la disposición general N° 45/2015, nada dispone sobre el tema.

Para el caso que tales sociedades civiles no se hubieren constituido o modificado por escritura pública, entonces sí sería aplicable el instituto de la subsanación previsto en la sección IV de la ley societaria.

26. SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN

La ley N° 26.994 derogó los arts. 361 a 366 de la ley N° 19.550 que la regulaba, ya que la misma no era sujeto de derecho y por lo tanto no podía ser titular de derechos y obligaciones, por tratarse de un contrato asociativo y no de una sociedad, siendo correcto que la hayan eliminado de la ley general de sociedades, al igual que el capítulo correspondiente a los contratos de colaboración empresaria, que también fue eliminado ya que ellos no son propios de una ley societaria.